

# El Gobierno pretende garantizar el uso del agua subiendo el precio



La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una rueda de prensa en Moncloa  
(Foto: Borja Puig de la Bellacasa)

## Los regantes se oponen al *Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España* elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende subir el precio del agua para garantizar su uso eficiente.

Lo denuncia este miércoles el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, que rechaza «de plano» esta subida del precio del agua prevista en el *Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España (LVGA)* impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Del Campo se opone a la modificación del régimen económico-financiero del agua argumentando que la legislación española ya está adaptada al principio de recuperación de costes que pide la normativa europea -la Directiva Marco de Agua (DMA)-. Lo que pasa es que hay que aplicarla «de forma correcta», aboga.

Según los datos oficiales manejados por Fenacore, en España se recuperan el 80% de los costes financieros relacionados con el agua y cerca del 70% de los costes totales, lo que demuestra que efectivamente se cumple con la normativa europea, máxime cuando la Directiva Marco de Agua no exige recuperar el montante total, sino «tener en cuenta el principio de recuperación de costes».

Lo que habría que hacer, en opinión del presidente de los regantes, es determinar qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los costes ambientales tienen que ser asumidos por la sociedad en su conjunto.

En este sentido, explica, si se incrementa la tributación del agua se perjudicará todavía más la competitividad de un sector estratégico como es la agricultura, que ya juega en clara desventaja por los costes de producción desorbitados debido al fuerte encarecimiento de la factura eléctrica en los últimos años.

En opinión de Del Campo, las modificaciones planteadas en el *Libro Verde* demuestran que el equipo encargado de su redacción desconoce por completo que la legislación actual promueve ya un uso eficiente del agua a través de la modernización de regadíos. Asimismo, ignoran que lo que se necesita es impulsar el Plan Director de Regadíos orientado a modernizar las 800.000 hectáreas todavía pendientes de acuerdo al doble objetivo de ahorrar agua y energía.

En opinión del representante de los más de 700.000 regantes que se agrupan en Fenacore, el estudio debería haberlo hecho «un centro oficial reconocido internacionalmente y con experiencia como consultora oficial de la Administración del Agua como es el CEDEX».

En cambio, el gabinete de Ribera ha delegado los trabajos para cambiar la política hidrológica nacional a las comunidades autónomas que, a través de foros territoriales, hacen prevalecer el interés localista sobre el general, cuando el agua es competencia del Estado.

En este sentido, reprocha que de entre los 32 expertos elegidos para desarrollar las propuestas del *Libro Verde* sólo había dos representantes de las comunidades de regantes, a pesar de que concentran el 75% de la demanda de agua en España. Este «desequilibrio» ha conllevado a plantear el medio ambiente como único y principal objetivo de la legislación. Y como solución para reducir la demanda hídrica estos «expertos» proponen incrementar el coste del agua con nuevos impuestos ambientales.

Estas «inconsistencias» unidas al hecho de que la ministra de Transición Ecológica, ahora en funciones, responsable del agua en España, no se ha reunido todavía con los representantes del 80% del regadío en España hace temer a los regantes que todo esto desemboque «en un diseño erróneo de la política del agua en España». Y para evitarlo han pedido formalmente al Gobierno el traspaso de estas competencias a la cartera de Fomento.

Para Andrés del Campo, presidente de la asociación que «riega» más de dos millones de hectáreas, es decir, más del 80% del regadío nacional, «mal encaminada va la política del agua en España si se diseña sin tener en cuenta el criterio de los principales usuarios del agua, que son los regantes».

De eso acusa a Teresa Ribera. Y también de haber «cedido la responsabilidad a nuevas corrientes ecologistas que rayan el extremismo al defender que las cuencas no tienen déficits sino demasiada demanda y que para reducirla hay que incrementar las costes del agua».